



Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y representación permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra

Resolución sobre la interrelación de la violencia policial, el racismo, la necro política, la política electoral y los intereses económicos en Brasil

(Original portugués)

La Asociación Americana de Juristas (AAJ) reunida en su Asamblea de Ramas el 28 de noviembre de 2025 en la ciudad de Sao Paulo, República Federativa de Brasil, declara:

La muerte de 6.134 personas por agentes estatales en Brasil en 2024, según datos del Mapa de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia, es sintomático la violencia policial, especialmente si se considera el perfil social y la raza de las víctimas.

Como revela el informe "Piel Objetivo: Crónicas de Dolor y Lucha", la población negra (que incluye personas mestizas y negras) representó un 86,2% del total de muertes en las unidades federativas analizadas (Amazonas, Bahía, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Río de Janeiro y São Paulo).

Es importante destacar que los efectos perjudiciales de la violencia policial sobre la población marginada y negra van mucho más allá de las cifras de muertes registradas. Dejan cicatrices profundas e indelebles.

La tragedia cotidiana de estas personas se normaliza, reflejando fielmente el racismo que aún estructura la sociedad y las instituciones brasileñas.

En cuanto a las políticas estatales dirigidas a esta población, considerando la omisión de derechos sociales y una ostentosa presencia represiva y punitiva, lo que tenemos, concretamente, es una auténtica necro política, que define, con parámetros autoritarios, quién puede o no sobrevivir.

El problema se agrava considerablemente cuando, basándose en el racismo, que sustenta la normalización del descarte de estas personas, la violencia policial se configura para servir a intereses políticos y económicos específicos.

Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, en la reciente masacre perpetrada en las comunidades de Alemão y Penha en Río de Janeiro, concretamente el 28 de octubre de 2025¹.

116 personas de estas comunidades fueron asesinadas en la Operación "Contenção". Según el informe oficial, la operación tenía como objetivo ejecutar órdenes de captura.²

Más allá de las muertes, el presente caso se caracteriza por el intento de ocultar los cuerpos. Más de la mitad de las víctimas fueron recuperadas por residentes, muchos de los cuales eran familiares de los fallecidos.³

Por si fuera poco, las muertes ya eran extremadamente graves, algunas de las víctimas presentaban signos de ejecución, con informes de disparos en la nuca y la frente, cuerpos atados, heridas de arma blanca, rostros desfigurados e incluso la decapitación de al menos una víctima.⁴

Los habitantes de las comunidades también denunciaron otros abusos y violaciones por la policía civil y militar, como violencia contra mujeres embarazadas, disparos indiscriminados e incendios intencionales de viviendas con residentes atrapados en el fuego cruzado.⁵

Ignorando toda esta violencia o aceptándola como algo normal, el gobernador del estado de Río de Janeiro calificó el operativo en la mañana del 29 de octubre de 2025, como un "éxito", llegando a afirmar que: "las únicas víctimas ayer fueron esos policías".⁶

El operativo policial en cuestión se desplegó en barrios densamente poblados, donde viven miles de familias de bajos recursos en situación de vulnerabilidad socioeconómica, donde prevalecen el subempleo y la informalidad. En los epicentros de la brutal acción policial, la vida cotidiana de la población se vio gravemente afectada, en una situación similar a un estado de sitio no declarado, que paralizó las actividades escolares, los servicios de salud y todos los demás servicios públicos prestados a la población, además de imponer, mediante una violencia excesiva, el cierre de comercios locales como panaderías, pequeños comercios, bares y tiendas, entre otros.

La acción policial se extendió por toda la ciudad, con repercusiones en toda la región metropolitana, donde se mezclaron el pánico y la desesperación, y hubo una ausencia absoluta

¹ <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2025/10/29/atualizacao-corpos-mortos-rio-de-janeiro.htm>

² <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2025/10/29/corpos-sao-levados-por-moradores.ghtml>

³ <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2025/10/29/veja-imagens-da-megaoperacao-no-rio-de-janeiro.ghtml>

⁴ <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2025/10/29/arrancaram-a-cabeca-do-meu-sobrinho-diz-moradora-do-complexo-do-alemao.htm>

⁵ <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2025/10/29/terror-oficializado-moradores-denunciam-abuso-policial-em-acao-no-rio.htm>

⁶ <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2025/10/29/claudio-castro-entrevista-apos-megaoperacao.ghtml>

de autoridades que pudieran brindar información y orientación, e incluso ordenar el cese del torrente de muertes, y cualquier medida de protección para la población. En otras palabras, la indiferencia hacia la población en general fue una vez más el sello distintivo del actual gobierno estatal en situaciones de esta naturaleza.

Todo se agrava con las declaraciones del jefe del Poder Ejecutivo estatal, que ha buscado normalizar y legitimar lo sucedido, dejando claro consecuentemente que las ilegalidades y excesos de la operación difícilmente serán investigados por la Policía Civil y Militar del Estado de Río de Janeiro.

La situación se complica aún más cuando, tras un análisis más profundo de los hechos, se descubre que, repitiendo lo ocurrido en la masacre de Carandiru en São Paulo en 1992 y en la masacre de Jacarezinho en Río de Janeiro en 2021, lo que motivó la abrupta y violenta intervención policial fueron las motivaciones electorales del gobernante en un escenario político marcado por: a) la inelegibilidad de Bolsonaro; b) la incertidumbre sobre el candidato de derecha; c) el aumento recurrente de la aprobación del gobierno de Lula; y d) el acercamiento de Lula a la administración Trump. La sombría y siniestra estrategia de obtener beneficios políticos de la ejecución sumaria de más de cien personas se hace aún más explícita cuando, inmediatamente después de la masacre, su comandante, el gobernador Cláudio Castro (PL-RJ), acude a los medios de comunicación para culpar a la izquierda y a la "maldita" decisión del Supremo Tribunal Federal (STF), emitida en la ADPF 635, que limitó las operaciones policiales en las comunidades durante la pandemia, como culpables de las muertes.

La motivación espuria también se hace evidente cuando, inmediatamente después de que el suceso se convirtiera en noticia nacional, los gobernadores de derecha Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Romeu Zema (Novo-MG), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), Jorginho Mello (PL-SC) y Mauro Mendes (União Brasil-MT), se reúnen en el Palacio de Guanabara para delinear los próximos pasos y establecer mecanismos para difundir la narrativa en torno al "éxito" de la operación.

En este contexto, no es irrelevante que cinco días antes del operativo, concretamente el 23 de octubre, el gobernador, al sancionar la ley que reestructura los puestos de la Policía Civil de Río de Janeiro, vetara el artículo que recreaba el llamado "bono del Salvaje Oeste", vigente entre 1995 y 1999, que otorgaba una bonificación de hasta el 150% del salario a los agentes que participaban en operaciones destinadas a "neutralizar a la delincuencia", alegando que dicha bonificación podría "generar gastos, constituyendo una afrenta a las normas establecidas por el Régimen de Recuperación Fiscal".

Paralelamente, pero sin la misma atención mediática, el mismo fenómeno político-económico se produce en São Paulo, en la favela Moinho.

La comunidad, ubicada en la región central de São Paulo, ha estado sufriendo un violento proceso de desalojo de residentes desde el año pasado, impulsado por el interés del alcalde en "revitalizar" la zona y exponerla a la especulación inmobiliaria. Las protestas fueron

fuertemente reprimidas por la Policía Militar de São Paulo, y las líderes de la resistencia vecinal, Alessandra Moja Cunha y su hija Yasmim Moja Flores, fueron arrestadas arbitrariamente por ser, respectivamente, hermana y sobrina de Leonardo Monteiro Moja, líder de la facción ilegal PCC. Según el Ministerio Público de São Paulo, ambas se resistían al desalojo por orden de Leonardo, para que este pudiera continuar con sus actividades de narcotráfico y extorsionar a los inquilinos que vivían en las propiedades de Leonardo en la favela.

El proceso de remoción cuenta con una fórmula de compensación financiera a los moradores en parceria con el gobierno federal, que no se cumple integralmente.

Más allá de eso, como muchos residentes, por las sucesivas intervenciones policiales, acabaron dejando sus hogares; lo que resulta es una comunidad con casas abandonadas y otras aún habitadas, pero el poder público sigue promoviendo la demolición de las casas vacías, generando pánico, daños físicos y psíquicos graves a los que aún habitan el local.

Por tales hechos, la AAJ expresa su más vehemente repudio a la utilización de la fuerza policial del Estado para implementar una necro política y atender propósitos político-electorales e intereses económicos.

Dado el 28 de noviembre de 2025, en Sao Paulo, Brasil.

Claudia V. Rocca
Presidenta AAJ Continental

Vanessa Ramos
Secretaria General